

CON FOCO EN INTELIGENCIA, CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO:

¿CÓMO DEBE SER el nuevo Ministro/a de Seguridad? Línea directa con La Moneda, nexos políticos y rol comunicacional

De su desempeño dependerá en gran medida la evaluación del próximo gobierno. Por eso, expertos señalan que debe no solo tener conocimientos técnicos, sino capacidad de gestión, y que se muestre firme, pero transmita esperanza a la ciudadanía, pues bajar la percepción de inseguridad será su primer desafío.

El éxito o fracaso del próximo gobierno estará dado, en buena parte, por cómo enfrente la crisis de seguridad que atraviesa el país. Ese es uno de los ejes centrales del programa de gobierno del candidato republicano José Antonio Kast, y también adquirió relevancia en el de la representante del oficialismo, Jeannette Jara. Aunque en los comandos creen que es muy pronto para hablar de nombramientos, reconocen que se trata de una decisión estratégica que debe ser tomada considerando factores técnicos, políticos y hasta habilidades blandas, pues apremiará mostrar resultados respecto de la principal preocupación ciudadana.

EQUIPO DE KAST: LIDERAZGO Y DETERMINACIÓN

“La crisis de seguridad es el problema más complejo y, en consecuencia, el mayor desafío que ha enfrentado el país en décadas”, afirma Cristián Vial, general (r) del Ejército, senador electo (ind.-P. Rep.) e integrante del equipo de Kast. En junio, cuando los republicanos anunciaron la ampliación del grupo de trabajo sobre la materia, se esbozó un primer perfil. El presidente de la tienda, Arturo Squella, sostuvo que es importante “que los equipos que estén a cargo de seguridad en un futuro gobierno de José Antonio Kast tengan nivel de conocimiento, trayectoria y experiencia en lo que son las policías y del trabajo de las Fuerzas Armadas en el combate”. En el equipo añaden que entre los rasgos más importantes están liderazgo, determinación para actuar y una visión sistémica, pues en su labor de coordinación del Sistema de Seguridad Pública tendrá que relacionarse con una serie de instituciones, incluso algunas que dependen de otros ministerios, y saben que podrían encontrar resistencia. Asimismo, fuentes del comando postulan que debe ser alguien que, de forma “deseable”, tenga conocimientos en inteligencia, pues el diagnóstico es que esta área está extremadamente débil; crimen organizado y prevención. Aunque, más importante que eso, creen que debe ser “muy político y muy potente comunicacionalmente”.

Esto último, porque están conscientes de que la primera señal —y primer objetivo— debe ser disminuir la percepción de inseguridad que la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana cifró en 87,7%. Quien asuma el puesto, apuntan, tendrá que ser capaz de manejar expectativas muy altas, presentar soluciones que hagan sentido a la gente y transmitir con resultados concretos que se están haciendo cargo del problema.

Además, dado que narcotráfico y crimen organizado afectan a la región, en el equipo consideran que el futuro ministro también debiese tener habilidades para generar colaboración con otros gobiernos de Latinoamérica y hasta buscar apoyo de otros países, como Estados Unidos.

COMANDO DE JARA: “CONSCIENTE DE SUS LIMITANTES”

En el equipo de Jeannette Jara, el encargado de Seguridad es el diputado Raúl Leiva (PS). A su juicio, quien llegue a la cartera “tiene que ser una persona que conozca la institucionalidad no solo desde el punto de vista represivo, sino que sea capaz de entender y conocer que el ministerio tiene un rol preventivo que es fundamental”. Leiva admite que “va a estar muy en el foco, ya que el trabajo que ha realizado el ministro Cordero es de implementación administrativa, que va a estar en pleno funcionamiento a partir del 11 de marzo. Es mucho lo que se juega y la expectativa que se tiene sobre él (el nuevo secretario de la cartera) va a ser muy importante”. Por eso, cree que quien ocupe el puesto debe tener conocimiento “en todas las áreas de seguridad, carácter y ser consciente no solo de sus capacidades, sino también de las limitantes legales”.

QUÉ Y DÓNDE BUSCAR

Distintos especialistas creen que una de las dificultades para dar con el ministro de Seguridad idóneo es que la criminalidad en Chile cambió en los últimos años y la formación no lo ha hecho al mismo ritmo. Igualmente, destacan lugares como el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescrio) de la U. San Sebastián, el Centro UC para la Seguridad Pública y el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la U. Andrés Bello, creados los últimos años y que han abierto espacio a la investigación, formación y debate, y que se suman a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe,

“La crisis de seguridad es el problema más complejo y, en consecuencia, el mayor desafío que ha enfrentado el país en décadas”, sostiene Cristián Vial, miembro del equipo de Seguridad de José Antonio Kast.

del Ministerio de Defensa) y Paz Ciudadana. Pablo Urquizar, coordinador del OCRIT, cree que el próximo ministro del ramo “debe ser alguien con experiencia comprobada, conocimiento de Carabineros y de la PDI, junto con comprensión estratégica de las políticas de seguridad y de la interacción con la sociedad civil. Será permanente. Además, requiere un per-

fil de gestor capaz de articular el Sistema de Seguridad Pública (...); comunicar a la ciudadanía con claridad y firmeza las acciones que el Estado está desplegando (...) y ejercer las habilidades políticas necesarias para desterrar los proyectos de ley que hoy se encuentran estancados en el Congreso”.

Añade que “hay dos principales amenazas que tiene el país son el crimen organizado y el terrorismo. Esas son las áreas en que tiene que tener experiencia comprobada el ministro”.

El exsubsecretario del Interior y miembro del Cescrio, Felipe Harboe, destaca que el ministro de Seguridad debe tener “línea directa con el Presidente” y “un piso político importante”. “Tiene que tener la capacidad de comprender el fenómeno completo de seguridad: orden público, inteligencia, crimen organizado, delincuencia habitual, ciberseguridad”, y una “mirada desde arriba”, que le permita “exigir control de gestión”.

Cristóbal Weinborn, director del Centro UC para la Seguridad Pública, enumera: “que conozca el sistema y no se sorprenda de con quienes va a trabajar, que entienda cómo funcionan las policías, el rol del Ministerio Público (...), tiene que ser respetado y hacerse respetar por estas instituciones, por eso tiene que saber del tema. Alguien que no sabe de criminología, seguridad pública o justicia penal no tiene nada que hacer en este mundo”.

Agrega que sea un articulador político, que entienda la importancia de evaluar procesos, “una persona que hable fuerte, pero que sea cálida (...)”. Necesitamos a alguien que le entregue calma a la ciudadanía, pero que no por eso no sea firme”.

El ejemplo de la exministra de Seguridad argentina durante los gobiernos de Macri y Milei, Patricia Bullrich, es mencionado por algunos como un ejemplo de quien reuniría

“Es mucho lo que se juega, y la expectativa que se tiene sobre él (el nuevo ministro) va a ser muy importante”, dice Raúl Leiva, encargado de Seguridad en el equipo de Jeannette Jara.

varias de estas características: capacidad política, conocimientos técnicos y mirada estratégica. Ya en 2018 hablaba de la importancia de enfrentar el crimen organizado y su paradigma era “80% inteligencia, 20% casualidad”. Sin embargo, consultados de si en Chile hay alguien con el perfil deseado, los tres responden que no lo ven con claridad.

En el equipo de Kast están Vial, el general (r) de Carabineros Enrique Bassaletti, y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, pero los tres fueron electos para asumir en el Congreso, y tanto especialistas como el comando creen poco aconsejable llevarlos al gabinete.

Trabajan también con ellos el coronel (r) de Gendarmería Luis González y el contratista Jorge Parga, aunque no hay una postura única respecto de si sería recomendable que asumiera un exmilitar. María Jesús Wulff, de Acción Republicana, Ruth Hurtado y Beatriz Hevia también han sido parte del equipo.

En el caso de quienes acompañan a Jara, el único nombre visible ha sido el del diputado Leiva, aunque algunos mencionan a Carolina Tóbi e incluso que el actual ministro, Luis Cordero, podría seguir en el puesto.

Sobre este último, conocedores creen que ha hecho el trabajo de instalación de la cartera y ha sido comunicacionalmente activo. Para Harboe, “nombrar a un ministro de Seguridad sin atribuciones en cárceles, migración e inteligencia fue un despropósito (...). Me da la impresión de que no tiene muchas herramientas para gestionar. Uno ve por un lado al fiscal nacional; por otro lado, al ministro; por otro, a las policías. No se ve un equipo, una estrategia coordinada (...). Están más preocupados de congraciarse con las asociaciones de funcionarios, que con el paso de Interior a Seguridad no afecte”.

»» OPINIÓN



CARLOS PEÑA

“Hechos consumados”

La toma de San Antonio plantea varios problemas de interés público sobre los que vale la pena reflexionar, siquiera brevemente. No se requiere ningún espíritu especialmente evangélico para advertir que ninguno de quienes viven allí, o casi ninguno, está en esa toma por espíritu deportivo o por la intención directa de defraudar la ley. Todos, o casi todos, o la mayoría, están allí porque carecen de un lugar donde vivir, un sitio que sentir suyo en el que sentarse por las tardes o donde criar a sus hijos. La pobreza de esa toma (como la de todas) no es la pobreza consentida de un asceta, ni la sencillez despojada de una cura de veras, ni una experiencia temporal de alumnos ignacianos, sino la pobreza desgraciada que es propia de un proletario o un marginal. Por eso hay algo de simplismo cuando se mira este problema como un asunto de incentivos: cuando se expropia el terreno ocupado por esta toma —se dice— habrá incentivos para que otras personas procedan a hacer lo mismo. Bien, aceptemos esa versión alta (tanta) y básica del esquema neoclásico; pero ¿para quién sería un incentivo hacer eso? Es obvio, solo lo sería para quienes anhelan escapar de vivir en la calle o de albergados en una pieza. Hacer eso es racional (racional en el sentido neoclásico) solo para quien tiene una situación de marginalidad. Y de ser así, ¿acaso no deberíamos pensar en lo que pudo ocurrir para que una mar-

ginalidad de esa índole se haya masificado tanto entre nosotros después de que hubo un momento en que pareció no existir? ¿O acaso se cree que todo esto es solo cosa de mafias y de migrantes como a veces se insinúa?

Se ha reparado poco en el hecho de que hace dos décadas, la sociedad chilena parecía haber dejado atrás, o estar a punto de dejar atrás, este tipo de carencias y de marginalidad total. Y, sin embargo, allí está la toma de San Antonio y las decenas de otras que hay por todo el país. Mientras esta pobreza se extendió poco a poco, la sociedad chilena —lo hemos olvidado, pero es hora de recordarlo— discutió encendidamente, y todavía lo sigue haciendo, sobre la gratitud en la educación superior, transformando a quienes accedían a ese nivel educacional (y que al hacerlo mejorarían inevitablemente su lugar en la estructura de ingresos) en las grandes víctimas y postergados del sistema. Es sorprendente la facilidad con que la sociedad chilena se encandiló con un

problema (el lucro aquí y allá, la necesidad de una educación de distribución gratuita y universal) y oscurció y sumió en las sombras a otros. Y es más sorprendente todavía cómo más tarde, a inicios del gobierno que ahora acaba, se puso el acento en particularismos de diversa índole que desviaban la mirada de los grandes problemas transversales o universalistas, el principal de los cuales (se de esperar que la izquierda haya caído en la cuenta de que fue un error olvidarlo) es y sigue siendo, a pesar de su disminución, la pobreza, es decir, la carencia de condiciones materiales para llevar una vida mínimamente autónoma. Si, es cierto, el género es, muchas veces, una fuente de discriminación, lo mismo que la orientación sexual o el origen étnico, pero por sobre todos ellos se encuentra la pobreza. Y es increíble que cuando la sociedad chilena ha estado en mejores condiciones para superar la más extrema, y luego de haberla reducido, fue justo el momento en que desvió la mirada a las nuevas

generaciones, como si ellas, en vez de tener oportunidades, fueran las grandes postergadas. Por eso hay que tener cuidado en juridificar el problema de la toma de San Antonio. Por supuesto que hay allí problemas jurídicos de envergadura (desoir sentencias judiciales o escamotearlas mediante decretos expropiatorios que no transfieren sin más la posesión al Estado son solo algunos de ellos), pero por sobre todo, por el hecho consumado de la pobreza.

En 1981, en la Sala Bulnes, Juan Rodríguez estrenó una obra en la que una pareja de pordioseros vivía en una propiedad ajena, a las orillas de un río, y eran desahogados por un vigilante que era, a su vez, humillado por su patrón. La obra era más bien cruda, pero, explicaba Juan Rodríguez, no podía ser de otra forma, puesto que vivir con dignidad era, dijo, la tarea más dura que se puede imponer un ser humano.

Llamó a esa obra “Hechos consumados”. Quizá sería hora de que se la reestrenara. ■

Hay que tener cuidado en juridificar el problema de la toma de San Antonio. Por supuesto que hay allí problemas jurídicos de envergadura, pero por sobre todo hay el hecho consumado de la pobreza.